

José Woldenberg*
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM
<josewolk@prodigy.net.mx >

Journal of Economic Literature (JEL):
D63, D72, D78

Palabras clave:
Equidad, justicia y desigualdad
Modelos económicos
de procesos políticos
Análisis positivo
de las decisiones políticas

Keywords:
Equity, Justice and Inequality
Economic Models
of Political Processes
Positive Analysis of Policy-making

Fecha de recepción:
19 de mayo de 2020
Fecha de aceptación:
23 de junio de 2020

Resumen

La situación en México antes de la pandemia ya reflejaba diversos problemas, pero con la llegada del Covid-19 el impacto se magnificó, pues luego de varios años de crecimiento precario, la violencia continuaba en ascenso, y el maltrato a muchas instituciones era recurrente. Por otra parte, el actual Presidente no ha reconocido que estaba obligado a coexistir con una pluralidad política y social legítima que debe no descalificar. Dicha situación se muestra ya tensa, y el desgaste con respecto a la opinión pública de las instituciones que hacen posible la democracia ya está presente cada vez con mayor énfasis, pero los efectos del coronavirus pueden agravar aún más el panorama.

Abstract

Mexico's situation before the pandemic reflected already several problems, but with the arrival of Covid-19 their impact got magnified, since, after several years of precarious growth, violence continued ascending, and bad treatment for many institutions was recurrent. On the other side, Mexico's current President has not recognized his obligation to coexist with a legitimate political and social plurality, which he must not disqualify. Such situation shows already itself tense, and the wear of institutions that make possible democracy, in relation with public opinion, is already present and all the time more emphatic, when the effects of coronavirus can still aggravate such a panorama.

La situación en México no era buena antes de la pandemia y el impacto de ésta muy probablemente la hará peor (ya en 2019 se había producido una caída del Producto Interno Bruto (PIB) luego de varios años de crecimiento precario, la violencia continuaba en ascenso, el maltrato a muchas instituciones era recurrente y el Presidente se negaba a reconocer que estaba obligado a coexistir con una pluralidad política y social legítima que no podía ni debía ser exorcizada). El desgaste en la opinión pública de las instituciones que hacen posible la democracia ya estaba presente, pero los efectos del coronavirus pueden erosionarlo aún más. Intentaré explicarme.

* El presente artículo es una ampliación de otro mío "¿Mas desgaste de las instituciones democráticas?" que apareció en el libro virtual coordinado por Rolando Cordera y Enrique Provencio. *Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia*. PUED, UNAM, 2020.

Si algo develaron las elecciones de 2018 fue el malestar con los políticos, los partidos, los congresos y los ejecutivos que habían hecho posible nuestra transición democrática. Instituciones y sujetos sin los cuales no es posible la democracia. Un discurso anti-político logró concitar el entusiasmo de franjas más que importantes de votantes (y entiendo aquí por discurso anti-político, aquel que desde la propia política divide al mundo en dos: los políticos como la fuente del mal y el pueblo como el manantial del bien y por supuesto quien así se expresa se asume como el vocero de los segundos). Un fenómeno (casi) universal que con sus peculiaridades también prosperó en México.

A pesar de que México había construido en las últimas décadas una incipiente democracia, el malestar con la política no sólo estaba presente, sino que resultaba expansivo. Porque en las últimas dos décadas del siglo pasado y los primeros años del presente, el país edificó un sistema plural de partidos, se amplió el ejercicio de las libertades, se construyó una germinal división de poderes, las elecciones empezaron a funcionar para canalizar no sólo la contienda entre fuerzas políticas distintas, sino como un conducto eficiente para la expresión de las oscilaciones de los humores públicos, la Corte robusteció su independencia, los pesos y contrapesos diseñados por la Constitución empezaron a funcionar, se crearon órganos autónomos del Estado para cumplir con diversas tareas; en una palabra, se construyó una germinal democracia.

Por desgracia, esa edificación venturosa fue erosionada en el aprecio de franjas importantes de la población por los fenómenos de corrupción recurrentes y documentados y por la espiral de violencia e inseguridad que dejó una estela de muertos, desaparecidos, familias devastadas y zonas del país bajo el control de grupos delincuenciales. Y si a ello le sumamos un crecimiento económico deficiente y la imbatible desigualdad, con lo que ello significa en términos de frustración de expectativas, de débil crecimiento del sector formal de la economía y de muy precaria cohesión social, quizá podamos entender por qué nuestra democracia careció y carece de la valoración que es necesario para sostenerla.

El gobierno actual es fruto de una potente ola de desafecto con la vida política que lo antecedió y por la promesa, convertida en ilusión, de que las “cosas” cambiarían. No obstante, desde antes de la irrupción de la pandemia, como apuntábamos, la economía empezó a decrecer, la violencia e inseguridad no frenaron su acenso, lo poco o mucho construido institucionalmente para el combate a la corrupción fue desconocido e ignorado y los programas de transferencias monetarias a diferentes grupos parece ser el único mecanismo ideado por la presente administración para hacerle frente a la pobreza.

En un escenario de por sí complicado irrumpió la pandemia. Y todos los signos apuntan a que en las próximas semanas y meses la economía mexicana decrecerá de manera pronunciada. Eso quiere decir que un buen

número de empresas cerrarán sus puertas y que varios cientos de miles de trabajadores perderán sus empleos. Si bien el Presidente insiste en mantener los programas de transferencias monetarias (lo cual en sí mismo está bien), es muy probable que dado que son financiados con recursos públicos y dado que es esperable que la recaudación fiscal decrezca, incluso tenga dificultades para su mantenimiento. Y si a ello sumamos la negativa gubernamental a desarrollar un programa contra cíclico para intentar paliar los efectos de la crisis, es probable que las condiciones materiales de vida de millones de personas se vean afectadas por la crisis combinada de salud y económica.

Según Gonzalo Hernández Licona “es posible que el crecimiento económico caiga más de 8% en el país, lo que ya se refleja en que el trabajo se está perdiendo a un ritmo no visto hace décadas. Entre enero y abril México perdió alrededor de 700 mil empleos formales y es posible que en el año perdamos 1.5 o 2 millones”. Y si a ello sumamos los cientos de miles de jóvenes que cada año buscan incorporarse al mercado formal y que verán multiplicadas las dificultades para lograrlo, el escenario se vuelve más brumoso. El mismo Hernández Licona nos informa que “es posible que en 2020 la pobreza se pueda incrementar en más de 13 millones de personas”. (“Trabajo y pobreza”, *Reforma* 12 de mayo de 2020). Por su parte, el INEGI informó que para fines de abril 12.5 millones de mexicanos habían perdido su fuente de ingreso, la enorme mayoría en el sector informal de la economía. Una cifra elocuente y dramática.

Ese escenario, imagino, hará que el malestar y la desafección hacia la política institucional se subrayen. Y eso no anuncia nada bueno.

Porque puede llegar a suceder que en un ambiente todavía más desencantado las pulsiones autoritarias que fácilmente pueden ser detectadas en la sociedad y el gobierno pueden llevarnos a que mucho de lo construido en las décadas recientes sea reblandecido, erosionado o peor aún, demolido.

Creo no exagerar si señalo que 1) nuestro Presidente no valora lo construido en términos democráticos en los últimos años. Y 2) no sólo eso, su discurso parecería apuntar a la conformación de un poder concentrado en la Presidencia sin los “molestos” pesos y contrapesos edificados apenas en el pasado inmediato. A ello y sólo a ello me refiero en las siguientes notas:

1) Que existan diferentes lecturas del pasado es natural. Que la jerarquización de los acontecimientos, las divisiones por períodos, la relevancia de las etapas, sean disparejas e incluso enfrentadas, resulta más frecuente de lo que le gustaría a quienes buscan acuñar versiones únicas y definitivas. Pero que de la historia se borre una etapa que en aspectos fundamentales resultó venturosa, preocupa.

La idea de un pasado forjado por tres grandes gestas –la Independencia, la Reforma y la Revolución– está más que extendida y fue alimentada y con-

solidada por la escuela. Y por supuesto no es una versión artificial. Sin ellas México sería otro. Su simplificación, sin embargo, que cristalizó en aquellas estampitas que comprábamos para hacer la tarea, resultaba elemental, esquemática, maniquea. Era una historia de buenos y malos, típica de afanes pedagógicos. Es esa versión canonizada y simple –no la historia compleja, contradictoria y hasta ambigua– la que parece alimentar el discurso y la visión del nuevo gobierno. De ahí la autoproclamada Cuarta Transformación presuntamente equiparable a las tres anteriores. Una especie de megalomanía por anticipado: antes de ser y hacer, la coronación publicitaria.

No obstante, temo más a la supresión de etapas importantes y productivas que no son valoradas por el discurso anterior. Una en espacial –reciente y que incluso permitió que la actual coalición gobernante lo sea– es no sólo ninguneada sino suprimida. Me refiero a la transición democrática que vivió el país entre 1977 y 1997 y a los primeros años de una democracia naciente que forjaron novedades que deberíamos valorar y proteger.

El tránsito del monopartidismo fáctico al pluralismo; de elecciones sin competencia y organizadas de manera facciosa a comicios disputados, contruidos de manera imparcial y en condiciones equitativas; de un mundo de la representación habitado por una sola fuerza política a otro colonizado por una diversidad de expresiones; de una presidencia (casi) omnipotente a otra acotada por distintos poderes constitucionales; de un Congreso subordinado al Ejecutivo a otro vivo y marcado por una dinámica pluralista; de una Corte inerte en cuestiones políticas hasta volverse un auténtico tribunal constitucional. Más la ampliación y ejercicio de las libertades, más la emergencia de una sociedad civil con agendas y reivindicaciones propias, más la creación de instituciones autónomas con tareas específicas y un impacto positivo en la dinámica del poder, más la naturalización del pluralismo como una realidad asentada y rotunda, configuran una germinal democracia que permitía y permite la coexistencia-competencia de la diversidad política. No obstante, todo ello es sustraído del relato oficial. Da la impresión que no sólo no se aprecia ese cambio, sino que se le desprecia y que se añora el despliegue de un poder presidencial sin contrapesos.

Cierto, las novedades democratizadoras fueron opacadas porque, como ya apuntábamos, simultáneamente la corrupción y la impunidad colorearon el espacio público, porque una ola de violencia creciente devastó familias, pueblos, zonas enteras del país, porque la economía no fue capaz de ofrecer un horizonte laboral o educativo a millones de jóvenes, porque las ancestrales desigualdades no fueron siquiera atemperadas. De tal suerte que el proceso democratizador significó poco o nada para muchos y generó incluso una nostalgia por un poder unificado y sin contrapesos.

México requiere, sin duda, atender la “cuestión social” porque sin ello seguiremos siendo un archipiélago de clases, grupos y pandillas con escasa “cohesión social”, un universo de desencuentros mayúsculos. Pero México es también un país complejo, contradictorio, moderno, que porta visiones, intereses, ideologías y sensibilidades disímiles y que reclama un formato democrático para procesar sus diferencias. En esa segunda dimensión mucho se avanzó en el pasado reciente. Y ojalá la nueva mecánica de la política no acabe por tirar al niño junto con el agua sucia.

2) El Presidente tiene un débil compromiso con la Constitución y la ley. Alguna vez incluso expresó que la justicia estaba por encima de la ley, como si nuestros tribunales pudieran ser, a estas alturas, similares a los del Rey Salomón. La clara transgresión a la Constitución que permitió que su partido (MORENA) tenga un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que no se corresponde con su votación, puesto que la Carta Magna establece que entre votos y escaños no puede existir una diferencia mayor de 8% –no estoy hablando de los realineamientos posteriores a la elección, sino a la triquiñuela de registrar candidatos de Morena como si fueran del Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES)–, o las supuestas consultas populares sin apego a lo que marca la normatividad, son botones de muestra preocupantes. Porque si algo debe modular a la autoridad, más allá de la mecánica de la propia política, son las leyes. Únicas capaces de contener la arbitrariedad y la discrecionalidad. De la misma manera cuando el Presidente se autocalifica para velar por la limpieza electoral, sin tener ninguna facultad para ello, está reeditando la vieja práctica que presume que las autoridades pueden hacer su voluntad sin reparar en si están o no habilitadas por la Constitución y las leyes. Hay que recordar, porque por desgracia es necesario, el viejo apotegma de que “las autoridades sólo pueden hacer aquello que les autoriza la ley, mientras los ciudadanos pueden realizar todo aquello que expresamente no esté prohibido por la norma”.

El presidente no valora ni aprecia el pluralismo político. Ha construido retóricamente dos campos: conmigo y contra mí. El, según su discurso, es la voz del pueblo y quienes se le oponen no son más que conservadores, fifis, miembros de la mafia en el poder. No es sólo una oratoria primitiva, sino que descalifica de manera inercial toda opinión, toda iniciativa que no surja de sus propias filas. Esa fórmula sabotea cualquier intento de diálogo y acuerdo y convierte a la política en un terreno perpetuo de polarización. De esa manera la riqueza del pluralismo político es despreciada fomentando un discurso elemental y polarizante. Ese pluralismo vivo es sin duda parte de la riqueza del país y negarlo o minusvalorarlo no sólo intenta suprimir un haber de la nación, sino construye un monólogo que es incapaz de comprender la diversidad que modela a México.

A todos los órganos autónomos del Estado se les redujo el presupuesto. Se trata, en muchos casos, de instituciones que por sus propias encomiendas no deben estar alineadas con ningún poder. Así, los institutos electorales, las comisiones de derechos humanos, los institutos de acceso a la información pública, fueron creados para dar garantías a los ciudadanos frente al poder político. Y eso parece no entenderlo y menos apreciarlo el Presidente. Por el contrario, hay signos suficientes (piénsese en el nombramiento de la titular de la CNDH) que revelan la intención de alinear a esos órganos a la órbita presidencial. Se trata de instituciones que no fueron fruto del capricho. En esos terrenos fue necesario sustraerlas de la órbita del Ejecutivo para que, con su autonomía, pudieran cumplir cabalmente con sus funciones.

Sus reiteradas descalificaciones a los medios y periodistas que le resultan “incómodos” develan su incapacidad para entender el papel de la prensa y para pensarse en un universo plagado de pesos y contrapesos. Al parecer ensueña con unos medios alineados al Presidente. Esa retórica es doblemente preocupante, porque en no pocas regiones del país el periodismo se ejerce en situaciones más que delicadas y riesgosas. Y aclaración no pedida: por supuesto que el Presidente tiene derecho a debatir, confrontar, corregir y desmentir lo que considere no se apega a la realidad. Pero no hace eso. Parece refractario al debate de argumentos y pruebas. Se conforma con adjetivar y leer intenciones, colaborando a que el espacio público se vuelva un terreno de descalificaciones mutuas que en nada ayuda a entender la profundidad de nuestros problemas y las eventuales vías para solucionarlos.

A la sociedad civil no la entiende como lo que es, un rosario de organizaciones sociales preocupadas y ocupadas en distintos temas que intentan hacer avanzar agendas diversas. Esa sociedad civil que entre nosotros es débil, es expresión de una comunidad donde palpitan muy diferentes preocupaciones y propuestas y que legítimamente ejercen sus derechos políticos. Bien vistas las cosas, ese archipiélago tiende a fortalecer la vida y el debate públicos y genera un contexto de exigencia a los poderes públicos. Pues bien, una y otra vez el Presidente ha hecho patente su desprecio hacia ese mundo.

Y si a ello sumamos que cuando el Legislativo o la Corte o algunos jueces se han apartado de sus directrices, la descalificación no se ha hecho esperar, la preocupación por una reconcentración del poder parece tener asideros.

No obstante, la historia no está escrita. Si bien los resortes presidenciales tienen asideros potentes en la sociedad, existen otros actores de los que dependerá el desenlace. Contamos con partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, otros poderes constitucionales y órganos autónomos del Estado, gobernadores, universidades, agrupaciones gremiales de profesionistas y súmele usted, que han aprendido a ejercer su

libertad y que tienen intereses y visiones diversas. La resolución de la Corte en relación al delirio del gobernador Bonilla que pensó que podía alargar su mandato después de que las elecciones se hubieran celebrado o la cohesión del bloque opositor en la Cámara de Diputados que impidió modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto que pretendía otorgarle facultades extraordinarias al Presidente en la materia o las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) que frenaron la publicidad personalizada en la entrega de créditos, son botones de muestra que en el escenario no existe una sola institución estatal y que el entramado republicano sigue vivo. Y finalmente existe una sociedad compleja, masificada y contradictoria que no cabe –ni quiere hacerlo– bajo el manto de una sola organización, ideología y voz. De tal suerte que el futuro de nuestra precaria democracia está abierto. No está escrito se está escribiendo. Puede resistir o reblandecerse y es menester estar atentos. Y en esa perspectiva lo que pase en las elecciones federales y locales de 2021 será crucial. El primer domingo de junio se elegirá una nueva Cámara de Diputados federal, 30 congresos locales, 15 gobernadores y cientos de ayuntamientos. La historia continúa...